

# Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

SE SUSCRIBE

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.



En la Imprenta de Acosta, Fortaleza-21.

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1878.

MARTES 31 DE DICIEMBRE.

Núm. 157.

## PARTE OFICIAL.

GOBIERNO GENERAL

DE LA

ISLA DE PUERTO RICO.

SECRETARIA.

En el expediente sobre suspension por el Ayuntamiento de esta Capital de los Maestros Don Juan Antonio Barrera y Luna y Doña María Eugenia Iglesias, elevado para su resolucio[n] definitiva á este Gobierno General, S. E. se ha servido dictar el siguiente acuerdo:

“Visto este expediente; y Resultando que el Ayuntamiento de esta Capital, en sesion celebrada el dia 7 de Agosto último, acordó entre otros particulares suspender al Maestro superior de una de las Escuelas elementales de esta Capital, Don Juan Antonio Barrera y Luna, y á la Maestra elemental de la Escuela de niñas del barrio de Cangrejos, Doña María Eugenia Iglesias, á consecuencia del éxito de los exámenes de sus respectivas Escuelas en Junio del presente año; Resultando que pasado el expediente á informe de la Junta Superior de Instruccion pública, lo ha evacuado manifestando que el Excmo. Ayuntamiento no tiene hoy la facultad de suspender á los Maestros y separarlos de sus cargos, como pretende el de esta Capital; que los hechos consignados en el acta de la Junta local respecto al Profesor superior Don Juan Antonio Barrera y Luna y á la Maestra Doña María Eugenia Iglesias no tienen importancia para que por ellos pueda imponérseles la correccion de que han sido objeto; por consiguiente que son improcedentes las suspensiones acordadas por el Ayuntamiento, debiendo en consecuencia los mencionados Profesores suspensos, Don Juan Antonio Barrera y Luna y Doña María Eugenia Iglesias, ser repuestos en sus respectivos cargos, con abono de los sueldos que hayan dejado de percibir, sin perjuicio del resultado de los expedientes gubernativos que la Junta local debe instruir; Resultando que pasado el expediente á informe del Consejo Contencioso-administrativo, lo evacua en los siguientes términos: “Vistos los acuerdos de la Junta local de Instruccion pública de esta Capital de 4, 5 y 18 de Junio último, remitidos al Gobierno General en 16 de Julio con el objeto de que, enterándose del mal resultado de los exámenes que dieron las Escuelas de los Profesores Don Juan Antonio Barrera y Doña María Eugenia Iglesias, resolviese lo que estimara conveniente, proponiendo la suspension del Sr. Barrera por no responder á la confianza que en él se ha depositado: Visto el acuerdo del Ayuntamiento de esta Capital de 7 de Agosto último, declarando suspensos á dichos Profesores en uso de las facultades que dice conferirle el artículo 57 de la Ley Municipal de 13 de Diciembre de 1872, dejando á la Junta local la formacion de los expedientes gubernativos y su remision al Gobernador para la decision que proceda: Visto otro acuerdo del mismo Ayuntamiento de 19 de Agosto último, solicitando del Gobierno General se reintegre á la Corporacion en

el uso de las facultades que en el ramo de Instruccion primaria y nombramiento de Profesores le concede la expresada Ley Municipal en sus artículos 51, 52, 53 y 57: Vista una representacion del Profesor Barrera al Gobierno General pidiendo la anulacion de la suspension que contra él dictara el Ayuntamiento sin tener facultades para ello: Vistos los informes emitidos sobre los documentos expresados por la Junta Superior de Instruccion pública y el oficio del Gobierno General de 21 del próximo pasado mes, remitiendo dichos documentos é informes á consulta de este Consejo: Considerando, por lo que hace á la cuestion de atribuciones de los Ayuntamientos en materia de instruccion pública, que dichas atribuciones están ciertamente consignadas en el artículo 51 de la Ley Municipal, párrafo 7º, pero no con la extension que el Ayuntamiento de la Capital pretende, sino restringidas por la cláusula *sin perjuicio de las disposiciones generales*, restriccion que equivale á decir que las disposiciones del Gobierno de carácter general sobre instruccion pública no pueden ser contrarrestadas por los acuerdos de los Ayuntamientos; de manera que es un error afirmar que el Decreto orgánico de 10 de Junio de 1865 esté derogado ni modificado por la Ley Municipal de 13 de Diciembre de 1872, tan solo por ser esta posterior á aquel, pues lojos de haber tal derogacion ni modificacion, lo que hay es una confirmacion expresa: Considerando que el artículo 52 de dicha Ley no trata de las atribuciones de los Ayuntamientos en materia de instruccion primaria, sino que se limita á prescribir que dichas Corporaciones ocurran con los fondos necesarios al sostenimiento de dicho ramo, por cuya razon no es de citarse como declarativo de facultades ó atribuciones: Considerando que los Maestros de instruccion primaria no pueden ser considerados como empleados ni dependientes de los Ayuntamientos para los efectos de los artículos 53 y 57 de la Ley, porque debiendo formar el Magisterio de toda la provincia, y aún de toda la Nacion, un Cuerpo profesional especial con homogeneidad de ideas y unidad de tendencias, responde á intereses mas altos que los puramente municipales, por mas que se paguen de estos fondos, que es la razon por la cual el Gobierno se reserva la facultad de dictar las disposiciones generales sobre el ramo; por manera que dichos artículos 53 y 57, al declarar que á los Ayuntamientos corresponde el nombramiento y la separacion de todos los empleados, dependientes y agentes en todos los ramos pagados de sus fondos, no comprende á los Maestros, porque existen disposiciones generales para el nombramiento y la separacion de estos, cuales son los artículos 54 y 55 del Decreto orgánico de 10 de Junio de 1865 y otras posteriores: Considerando, esto así, que los deberes y atribuciones de los Ayuntamientos en la materia de instruccion con arreglo á la Ley Municipal, son pagar de sus fondos este servicio y ejercer sobre los Maestros y sobre las Escuelas una accion que sea compatible con la que las disposiciones generales atribuyen al Gobierno y á las Juntas locales delegadas de él, sin inmiscuirse por concepto alguno en las atribuciones del uno ni de las otras:

Considerando que atribuida la presidencia de las Juntas locales al Alcalde - Presidente del Ayuntamiento, y dado ingreso además á un Concejal, segun el artículo 79 del Decreto orgánico citado, los Ayuntamientos tienen en dichas Juntas la iniciativa y la influencia conveniente en los negocios de instruccion para evitar la duplicidad de la accion administrativa y los conflictos que de ella pudieran resultar: Considerando que si los Ayuntamientos de esta Isla tuvieron en cierto período las atribuciones que hoy echa de ménos el de la Capital, fué por la tolerancia de Gobiernos ó situaciones pasadas que, interpretando sin duda con el mejor deseo, pero sin sujecion al rigor de los principios el sentido de los artículos 51, 52, 53 y 57 de la Ley Municipal, introdujeron en el ramo de Instruccion pública un verdadero desconcierto, destruyeron la homogeneidad de ideas y unidad de tendencias del Profesorado, y dieron lugar á medidas generales extremas, que hoy todavía rigen; de donde se sigue que la reivindicacion de las facultades está ya hecha por quien debia, que es el Gobierno, y que los Ayuntamientos nada tienen que reclamar ni en qué ser reintegrados, por cuanto sus atribuciones, entendidas en el sentido arriba explicado, no han sido en manera alguna cercenadas, sino que las conservan íntegras: Considerando, por lo que hace al Profesor Don Juan Antonio Barrera, que su suspension ha sido dictada por Autoridad incompetente, pues no es atribucion del Ayuntamiento de esta Capital, sino de la Junta local de Instruccion pública, á tenor del artículo 87, párrafo 6º del repetido Decreto orgánico: Considerando que la Junta local, al declinar en el Gobierno General sin expresar causa alguna la facultad que tiene de suspender por sí al Profesor Barrera, ha introducido un trámite innecesario y que saca el asunto de su verdadero cauce: Considerando, por lo que respecta á la suspension de la Profesora Doña María Eugenia Iglesias, que habiendo sido dictada por el Ayuntamiento y no por la Junta local, adolece de vicio de nulidad; el Consejo es de parecer: — 1º Que el Ayuntamiento de esta Capital, y todos los de la provincia, están en el derecho de usar las atribuciones que les confieren los artículos 51, 52, 53 y 57 de la Ley Municipal de 13 de Diciembre de 1872, pero dentro de la interpretacion que les dá este Consejo, que es, en su sentir, la interpretacion legal. — 2º Que la suspension del Profesor Don Juan Antonio Barrera, declarada por el Ayuntamiento de esta Capital, es nula y no puede producir efecto alguno. — 3º Que procede ordenar el Gobierno General á la Junta local de Instruccion, que desde luego use por sí la facultad que le confiere el párrafo 6º del artículo 87 del Decreto orgánico de 10 de Junio de 1865, si es que cree grave el caso del Profesor Barrera, y que en lo sucesivo se abstenga de declinar, porque no puede hacerlo legalmente, las facultades que le son propias. — 4º Que la suspension de la Profesora Doña María Eugenia Iglesias, declarada tambien por el Ayuntamiento, es nula y de ningun efecto. — Y 5º Que lo dicho se entiende sin perjuicio de la resolucio[n] que dicte el Gobierno General en el expediente ó expedientes gubernativos que la Junta local ins-

truya á los mencionados Profesores, si lo estima procedente. — Infórmese en estos términos al Excmo. Sr. Gobernador General con devocion de los documentos expresados. — Lo que tengo la honra de transcribir á V. E. como resultado de su atento oficio de 21 de Setiembre anterior, devolviéndole los documentos recibidos y significándole que, si bien estos abrazan algunos extremos de que el Consejo no se ha ocupado, es por haber observado que venian incidentalmente á tratarse con la cuestion principal de los Profesores; pero que si V. E. estima oportuno oír sobre ellos el dictámen de la Corporacion, esta tendrá el honor de emitirlo tan luego se sirva manifestarlo con remision de los antecedentes que existan;” Resultando que formado expediente por la Junta local á los Profesores de que se trata, ha sido remitido á este Gobierno General el correspondiente á cada uno: Considerando que en dichos expedientes, en concepto de la Junta, no aparecen méritos suficientes para imponer á los Profesores en cuestion la suspension de que han sido objeto, de cuya opinion participa este Gobierno General: y Considerando que las apreciaciones legales emitidas por la Junta Superior y por el Consejo en sus respectivos dictámenes son, en sentir de este Gobierno General, completamente exactas, y por consiguiente, aceptables las conclusiones á que sirven de fundamento.

De conformidad con el parecer de la Junta Superior de Instruccion pública y muy especialmente con el del Consejo Contencioso-administrativo, acuerdo:— 1º Que la doctrina expuesta por este Cuerpo tocante á las atribuciones de los Ayuntamientos en punto al nombramiento del personal de Instruccion pública para las Escuelas municipales es la legal, y que á ella, por tanto, deben atenerse estrictamente dichas Corporaciones en lo sucesivo. — 2º Que los Profesores Don Juan Antonio Barrera y Luna y Doña María Eugenia Iglesias deben ser y sean repuestos en sus cargos, con abono de todos los sueldos que hayan devengado durante el tiempo de su suspension. — Y 3º Que se publique este acuerdo en la GACETA OFICIAL de la Isla para conocimiento y cumplimiento de todos aquellos á quienes interesen las resoluciones de carácter general que contiene. — DESPUJOL.”

Y á fin de que se ejecute lo dispuesto por S. E. en la última parte del anterior acuerdo, se publica este en el PERIÓDICO OFICIAL.

Puerto-Rico, Diciembre 20 de 1878.— El Secretario del Gobierno General, Francisco Fontanals y Martinez. [3850]

El Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido disponer que los Sres. Alcaldes de los pueblos cabeceras de Departamentos, autorizados por Circular de 26 de Junio de 1874 y otras posteriores para librar pasaportes para el exterior de la Isla, omitan en lo sucesivo el dar cuenta á este Gobierno General por telégrafo, cada vez que lo verifiquen, sin dejar por esto de llevar en la Alcaldía respectiva el correspondiente registro, en que hagan constar siempre la expedicion de dichos documentos.